



LA REUNIÓN ENTRE LOS OBISPOS Y EL GOBIERNO: SIN “SELFIE” NI FOTO DE FAMILIA

Desde 2007, año en que Daniel Ortega tomó posesión de la presidencia de la República, no se había producido ningún intento de diálogo formal entre los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el gobierno.

Desde hace casi quince años, la familia Ortega ha cultivado una estrecha relación con el cardenal Miguel Obando y Bravo, un antiguo antisandinista que sufrió una repentina conversión cuando Roberto Rivas Reyes, su cercano colaborador, director ejecutivo de la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana (COPROSA) y presidente del Consejo Supremo Electoral, estaba siendo procesado en la Contraloría General de la República por cuantiosas exoneraciones ilegales. Ortega, que ya

contaba con una correlación favorable en esa institución, mandó paralizar el trámite y liquidar la acusación.

El cristianismo oficialista

Desde entonces, Obando se convirtió en una figura omnipresente en las celebraciones y actividades políticas del FSLN, favoreciendo con su discurso y su presencia la reinención de Ortega como hombre de familia y católico devoto, imagen necesaria para alejar de la memoria popular el recuerdo de las acusaciones de violencia sexual que su hijastra había hecho en su contra en 1998. Por su parte Rivas, contó con los votos del FSLN para su reelección en el Consejo Supremo Electoral. Ha disfrutado, junto a su familia, de todo tipo

de privilegios y prebendas gubernamentales, facilidades extraordinarias para sus negocios e impunidad total frente a cualquier tipo de acusación de corrupción.

A Ortega esa relación le ha sido enormemente ventajosa. Rivas aseguró la desaparición del 8% de los resultados de las elecciones nacionales del 2006, que le evitaron una segunda vuelta con una segura derrota. Posteriormente ha coordinado la ejecución de todos los fraudes electorales municipales, regionales y nacionales hasta la fecha.

La ofensiva para cooptar a la iglesia católica y a las evangélicas incluyó otras acciones y gestos políticos. En 2006, previo a las elecciones, el FSLN y el PLC, se juntaron en la Asamblea



Nacional para penalizar el aborto terapéutico, legal desde 1893. La medida encontró un amplio respaldo entre las iglesias y en grupos conservadores de la sociedad nicaragüense.

En los años transcurridos desde entonces, el oficialismo ha garantizado que no legalizará el matrimonio entre personas del mismo sexo; admitió la mediación en la Ley 779 con grave riesgo para la vida de las mujeres; el ministerio de salud no ha promovido el uso de preservativos para prevenir el contagio con VIH, labor que ha descansado en organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Educación tiene embargados miles de ejemplares de un Manual de Educación para la Vida elaborado por técnicos de alta calificación, que podría ayudar en la formación integral de la juventud.

A ciertas iglesias evangélicas les ha concedido fondos, legalizado terrenos, dedicado obras públicas, facilitado las actividades de predicadores nacionales e internacionales. A ciertos sacerdotes y religiosos de la iglesia católica se les otorgan prebendas para asegurarse su respaldo y activismo, al margen de las decisiones de las diócesis.

La reinención religiosa de la familia Ortega y del FSLN ha ido más allá. El gobierno se definió como cristiano, utilizando profusamente en el discurso oficial y en todas sus actividades, la ritualidad, los emblemas, los símbolos, las imágenes y el lenguaje propios de la iglesia católica y en menor medida de las iglesias evangélicas. Organizó sus propios “rezadores de las rotondas” con empleados públicos obligados a realizar esa representación y mandó colocar imágenes religiosas en sitios públicos. Ortega y su esposa aparecieron como oficiantes de una religiosidad que transita paralela a la iglesia católica, es dependiente del aparato de poder y está diseñada para fortalecerlo. Así, el régimen se presenta como obra de Dios y manifestación de la predestinación divina.

Gobierno necesita recomponer su relación con la iglesia católica

El oficialismo perdió su conexión institucional con la iglesia católica luego de la jubilación del cardenal Obando en 2005. Valorándola como innecesaria, no respondió a ninguno de los llamados a un diálogo realizados por los obispos.

El año pasado, con motivo de la presentación de cartas credenciales del nuevo Nuncio Apostólico, Fortunatus Nwachukwu y de las actividades de celebración del centenario de la creación de la Provincia Eclesiástica de Nicaragua, hubo dos encuentros diplomáticos en los que coincidieron algunos obispos y Ortega. Fuera de las formalidades, el gobierno no dio ningún indicio de estar dispuesto a un diálogo serio con la iglesia católica.

El nombramiento de monseñor Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, como cardenal precipitó una respuesta del gobierno a las viejas demandas de diálogo. La consagración del nuevo cardenal remarcó la condición de estrella declinante del cardenal Obando, anciano, fuera de toda jurisdicción eclesial y cuestionado en círculos de la curia romana por su alianza con el poder político. Brenes por su parte, ha sido un obispo popular, de espíritu conciliador, poco estridente, muy vinculado a la base de la iglesia y a los integrantes de su diócesis. Ahora se agrega su estrecha relación amistosa con el Papa Francisco.

En esas condiciones, el gobierno no podía continuar, simplemente, con la política de burla y escarnio hacia al-

gunos obispos, ni seguir haciendo caso omiso de sus palabras. Desde su perspectiva, necesita una recomposición de la relación con la iglesia católica, con su institucionalidad, con sus autoridades, que el cardenal Obando ya no garantiza. Ortega pretende, al menos, neutralizar a los obispos y sus posiciones, atraerlos haciéndoles concesiones menores en diversos temas, dejando lo que considera político fuera de la discusión y de la relación mutua.

No había un mejor momento para buscar un primer acercamiento que la llegada del cardenal Brenes al país, luego del acto oficial de imposición del birrete cardenalicio. Ortega mataba así dos pájaros de un tiro: desmentía los rumores de su muerte que saturaban el ambiente nacional y hacía una señal amistosa a los obispos y al Nuncio, quien se ha proyectado, desde su llegada, especialmente interesado en un acercamiento entre los obispos y el gobierno.

El preludeo del diálogo

La fecha final de la reunión con los obispos fue establecida por el gobierno, asegurándose que la elección de funcionarios en los Poderes del Estado estuviese resuelta. Ortega opera con la política de los hechos consumados, eso explica su disposición a conversar con los obispos, toda vez que ya está en posesión y control de la totalidad de los mecanismos de poder institucionales, políticos y mediáticos. Así cualquier conversación se le torna más sencilla. En su intervención del 18 de mayo en Niquinohomo, al defender la reelección de Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral, aseverando que lo hecho, hecho está, le enviaba una clara y directa advertencia a los obispos de que el gobierno iría a la reunión con vetos muy definidos.

El mismo día de la reunión, en el medio oficialista "El 19", un editorialista ahondó en el sentido profundo de la intención oficial para el diálogo. Afirmó que Ortega no hace depender su legitimidad de lo que digan o piensen de los obis-



pos, a quienes, de paso, trató de rebajar como interlocutores, afirmando que su representación excluye a los evangélicos y a otros que no poseen creencia alguna. Les recordó a los obispos que el Estado Vaticano es una monarquía absoluta en la que el Papa concentra la totalidad de los poderes y funciones ejecutivas, legislativas y judiciales; no hay elecciones, ni

Sin atenerse a los límites marcados por el gobierno, los obispos presentaron un extenso documento que con el nombre de En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, agrupado en seis grandes temáticas (familia, problemática social, derechos humanos, situaciones en el Vicariato Apostólico de Bluefields, el trabajo de evangelización y algunas políticas del gobierno y la institucionalidad), hace un diagnóstico de la situación general del país y de diversos sectores sociales, con propuestas en cada caso.

debates, ni se aceptan partidos políticos, ni observadores. En consecuencia, sostiene, el diálogo no puede ser asimétrico: si los obispos están dispuestos a aceptar ese modelo de gobierno para su iglesia, no tienen razón alguna para cuestionar el modelo político dominante en Nicaragua. Y si lo hacen, es por coincidencia con los intereses de la extrema derecha del país.

La iglesia en el diálogo

La Conferencia Episcopal llegó al diálogo precedida de sus cartas pastorales en las que ha advertido los peligros del autoritarismo y los fraudes electorales, la falta de democracia y Estado de Derecho, y los problemas sociales y económicos no resueltos. Aunque mantuvo en secreto sus propuestas para la reunión, era claro que no dirían nada distinto a lo afirmado en los últimos años.

Sin atenerse a los límites marcados por el gobierno, los obispos presentaron un extenso documento que con el nombre de En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor, agrupado en seis grandes temáticas (familia, problemática social, derechos humanos, situaciones en el Vicariato Apostólico de Bluefields, el trabajo de evangelización y algunas políticas del gobierno y la institucionalidad), hace un diagnóstico de la situación general del país y de diversos sectores sociales, con propuestas en cada caso.

En el documento, la CEN expresa sus preocupaciones sobre la situación de la familia, las deficiencias en la calidad educativa y los servicios de salud, la mala situación de las cárceles, el desempleo y la migración, en especial de la juventud, el tráfico de menores, la inseguridad ciudadana, la actuación parcializada de la

Policía Nacional, las violaciones a los derechos laborales, la discriminación en los programas gubernamentales, el deterioro de los recursos naturales, la falta de libertades civiles y de expresión, el monopolio de los medios de comunicación, la falta de transparencia informativa del gobierno, los problemas derivados del proyecto canalero para los pueblos indígenas y comunidades étnicas en la Costa Caribe y el grave déficit de institucionalidad del país.

Los obispos reclamaron por “la manipulación política”, la “apropiación arbitraria de terminología y valores de la religión católica para incorporarlos a slogans partidarios, desvirtuando de este modo su real y verdadero significado”. Esa actuación propia de la reinvencción católica del FSLN y la familia Ortega, fue planteada como un agravio que “entorpece una respetuosa relación entre Iglesia y Estado”.

La Conferencia Episcopal señaló la falta un plan integral de nación para enfrentar los grandes problemas del país. En cuanto a la institucionalidad, recordaron lo dicho en la carta pastoral de septiembre de 2012: “la actividad política en el país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo”, afirmando luego que “no perdemos la esperanza en que podremos siempre enrumbar el país hacia un verdadero estado democrático”.

La CEN concluyó haciendo dos grandes propuestas: la realización de un “Gran Diálogo Nacional” con participación de todos los sectores del país, “diálogos transparentes y confiables entre el Gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil, que lleven a un entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad y cristalicen en un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social que asegure estabilidad política, jurídica, social y económica al país y que afronte los grandes problemas de la población”.

La segunda propuesta apunta a un tema medular, iniciar la reforma profunda al sistema electoral. Los obispos pidieron a Ortega su palabra de honor “para garantizar en el 2016 un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto, con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda, la voluntad popular; con un sistema de credulación independiente del mismo CSE que le garantice



a cada nicaragüense su cédula en tiempo y forma antes de las elecciones; y con un proceso electoral abierto irrestrictamente a observadores de instituciones nacionales y extranjeras”.

Las concesiones y el silencio de Ortega

Durante su respuesta de hora y media, Ortega ofreció a los obispos una comunidad de intereses morales estratégicos. De acuerdo a declaraciones del obispo de Estelí, Abelardo Mata, él afirmó con vehemencia compartir sus valores y preocupaciones sobre los asuntos morales y de familia, que siente amenazados por el curso actual de las sociedades occidentales. Para persuadirlos, hizo alarde de su pensamiento conservador, admitiendo que es criticado por la izquierda internacional por ello. Somos los mismos, les dijo entre líneas, lanzando un anzuelo bien cebado para alinear a los obispos a su bando.

Luego ofreció que todos los asuntos atinentes a la gestión gubernamental puedan ser vistos de manera particular con los ministros y encargados institucionales, una expresión de la estrategia oficialista que ya ha sido utilizada con éxito, con empresarios del gran capital nicaragüense, siempre que se mantengan en el cauce exclusivo de los negocios.

Se trata de abrir y mantener diálogos parciales, sectoriales, compartimentados, en los que se resuelven o canalizan demandas específicas, a cambio de pasar

los temas políticos a la sobremesa. De acuerdo al gobierno, los obispos deberán confiar en que sus peticiones particulares morales o sociales podrán ser resueltas o respondidas, pero deben dejar de intervenir en los asuntos políticos, institucionales y de derechos humanos.

En la mira oficialista, cooptar a la iglesia católica en el mismo sentido que se ha hecho con los grandes empresarios y el liderazgo del COSEP, sería un logro de legitimación extraordinario. A eso apunta el gobierno con la reconexión con la Conferencia Episcopal.

De acuerdo al obispo Mata, de una parte de la respuesta de Ortega se puede deducir que considera la democracia como problemática y la existencia de partidos políticos como no deseada, tal como el editorialista oficialista había proclamado. Sobre las dos grandes propuestas de los obispos, Ortega guardó silencio. Es una vieja táctica que le ha permitido, en otros casos, aparecer como abierto a lo que se le dijo, ganar tiempo e ilusionar a la contraparte, mientras conspira en su contra o continúa haciendo lo que ha decidido.

Antes de transcurridas veinticuatro horas de la reunión, Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, afirmó que es imposible hacer los cambios recomendados en el sistema electoral. De esa manera, por boca de funcionarios de distinto nivel, se irán sumando las respuestas negativas que Ortega prefirió ocultar con su silencio.



Las opciones de la Conferencia Episcopal

Nada de lo dicho por los obispos es nuevo. Distintos sectores sociales, organizaciones sociales y partidos políticos han planteado los mismos temas, de diversas formas. En su documento, la CEN articula todos los problemas del país y vincula la falta de soluciones con el déficit institucional, la falta de democracia y el irrespeto a las leyes. Los obispos hablaron alto y claro, llamaron a las cosas por su nombre, ponderaron lo que les parece que marcha bien y fueron críticos con lo que consideraron lo ameritaba.

Su mensaje tiene un impacto mayor que otro cualquiera, por la credibilidad y autoridad que le confiere su oficio religioso y la adscripción de la mayoría del pueblo nicaragüense a la fe católica. La iglesia, por su organización institucional y social, por sus medios disponibles, tiene una gran capacidad de amplificar su voz, de hacer que se oiga en todo el territorio nacional. Un gobierno, cualquiera que sea, no puede dejar de tener en consideración esa realidad.

Pero ciertamente, los planteamientos de la Conferencia Episcopal son hechos sin que la crisis de legitimidad del régimen se exprese como crisis de gobernabilidad, con movilización y la protesta popular en las calles o desobediencia civil. Con eso cuenta el régimen para disminuir el alcance del diálogo.

Pasado el tiempo, los obispos serán convocados a largas y tediosas sesiones con los ministros, en los que se les atiborrará de información publicitaria, exposiciones felices y fantasías gubernamentales. Algunos asuntos serán resueltos. Les invitarán a tener capillas y distribuir

Distintas organizaciones políticas y sociales respaldaron la iniciativa de diálogo de los obispos con el gobierno. Entre los partidos políticos, el PLC pidió la incorporación, sin exclusiones, de organizaciones políticas y distintos sectores sociales de nicaragüenses, dentro y fuera del país.

material religioso en las cárceles; les asegurarán que hay sendos planes para una atención de salud y una educación con calidad. Sobre algunos temas álgidos como la presunta construcción de un canal interoceánico y los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, abundarán las explicaciones generales, sin resultado alguno.

Distintas organizaciones políticas y sociales respaldaron la iniciativa de diálogo de los obispos con el gobierno. Entre los partidos políticos, el PLC pidió la incorporación, sin exclusiones, de organizaciones políticas y distintos sectores

sociales de nicaragüenses, dentro y fuera del país. El MRS planteó que el diálogo debía incluir el restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como problemas urgentes de naturaleza económica y social. El PLI consideró necesario la inclusión de temas de gobernabilidad y el respeto del gobierno a la Constitución Política. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y AMCHAM, manifestaron su deseo de que hubiese un diálogo beneficioso al país.

En oposición al diálogo iglesia-gobierno se han levantado algunas voces desde el PAC, antiguos dirigentes del FSLN y de otros sectores, que ven en esa reunión una oportunidad para la manipulación gubernamental o un acto de ingenuidad o de activismo político de los obispos.

Otros sectores han valorado positivamente el mensaje de los obispos como un instrumento de lucha cívica, un diagnóstico de los problemas nacionales, una voz de las demandas sociales, centrándose en las dos grandes propuestas hechas por la CEN. Desde las fuerzas políticas, los medios de comunicación y la sociedad civil se ha manifestado el deseo que sean escuchados, pero a la vez se duda de la voluntad política del gobierno para cambiar de rumbo sin que medie una unidad de fuerzas opositoras y una movilización popular.

Es de esperarse que en lo sucesivo, los obispos sigan agregando demandas políticas, sociales, económicas y de derechos humanos para ponerlas frente al poder político y la sociedad. Pero, ¿llevarán su mensaje a cada parroquia para levantar el compromiso de sus integrantes y estimular la acción ciudadana o se limitarán a dejar sobre la mesa su propuesta para que sea asumida y recogida por otras expresiones de la sociedad civil y los partidos políticos?

El cardenal Brenes y otros obispos han afirmado que toca ahora jugar su papel a los partidos políticos y fuerzas sociales, buscar la unidad, canalizar las demandas ciudadanas y hacer propuestas para lograr soluciones. El guante está en el aire.